MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

16940 *ORDEN de 28 de junio de 1985 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 55.185.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, seguido ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo con el número 55.185, interpuesto por don José de la Casa Serrano, doña Luisa Cárdenas Martínez, don Manuel Ureña Valderrana, doña Juana de Dios Medina Cárdenas, don Juan de Dios Medina Cárdenas, doña Ramona Medina Cárdenas, don José Medina Cárdenas, doña Carmen Anguita García, doña Carmen Castillo Anguita, doña Josefa Castillo Anguita, don Manuel Ortiz Martínez, don Sebastián Ortiz Molina, don Bartolomé Ortiz Molina, doña Encarnación Ortiz Molina, don Juan Ortiz Molina, don Manuel Ortiz Molina, don Juan Miguel Campos Hernández, don Ramón Cobo-Reyes Sánchez Rando y don Juan Piedra Serrano, contra la sentencia dictada con fecha 17 de junio de 1983 por la Audiencia Territorial de Granada, en el recurso número 316/1980 y acumulados, promovido por los mismos recurrentes, contra acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Jaén de 6 de febrero de 1980 y desestimación presunta del recurso de reposición, se ha dictado sentencia con fecha 2 de enero de 1985, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don José Serrano y demás litisconsortes, contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Granada de 17 de junio de 1983, sobre impugnación de los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Jaén, de 6 de febrero y 6 de junio de 1980, fijando el justiprecio de terrenos comprendidos en el Polígono número 39 del Plan General de Ordenación de dicha ciudad, denominado "La Vestida", a que las presentes actuaciones se contraen, debemos, con revocación parcial de la sentencia apelada, anular y anulamos, por su desconformidad a Derecho, los referidos acuerdos administrativos de tasación, y, en su lugar, declaramos que el justiprecio que el Ayuntamiento expropiante ha de abonar a los titulares de las diversas parcelas afectadas, con el premio de afección y los correspondientes intereses legales de demora, es el resultado de la aplicación a sus respectivas parcelas de los precios unitarios y demás determinaciones contenidas en el penúltimo fundamento de esta sentencia; sin efectuar especial imposición de las costas en ninguna de las instancias.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, en lo que a este Departamento respecta.

De esta resolución y de la sentencia debe darse traslado a la Junta de Andalucía a los efectos que pudieran proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la mencionada Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 28 de junio de 1985.—P. D. (Orden de 6 de junio de 1979), el Subsecretario, Baltasar Aymerich Corominas.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.

16941 *ORDEN de 28 de junio de 1985 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 83.016.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Cuarta, con el número 83.016, interpuesto por el Abogado del

Estado, representante y defensor de la Administración; contra la sentencia dictada con fecha 3 de febrero de 1983 por la Audiencia Territorial de Pamplona, en el recurso número 176 de 1981, interpuesto por don Gregorio Logroño Parejo, contra la resolución de 27 de abril de 1981, se ha dictado sentencia, con fecha 4 de marzo de 1985, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando, en parte, el recurso de apelación número 83.016, promovido por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona de 3 de febrero de 1983, la revocamos en el particular referente a declaración de nulidad que contiene de la orden de demolición de la casa-refugio construida en la finca de autos, dado que en tal extremo se declaran ajustados a Derecho los acuerdos del Gobierno Civil de Navarra de 1 de noviembre de 1979 y el desestimatorio de la alzada dictado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 27 de abril de 1981; confirmando en el resto de sus pronunciamientos; todo ello sin expresa condena en costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 28 de junio de 1985.—P. D. (Orden de 6 de junio de 1979), el Subsecretario, Baltasar Aymerich Corominas.

Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

16942 *ORDEN de 28 de junio de 1985 por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 5 de junio de 1985 disponiendo el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en los recursos contencioso-administrativos acumulados números 407.625 y 407.626.*

Ilmo. Sr.: En los recursos contencioso-administrativos acumulados seguidos ante el Tribunal Supremo con los números 407.625 y 407.626, interpuesto por don Pedro y don José Torres Calvi, contra resolución de 8 de febrero de 1977, se ha dictado sentencia con fecha 16 de octubre de 1984, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando en parte los recursos contencioso-administrativos números 407.625 y 407.626 promovidos por el Procurador señor Pizarro en nombre y representación de don Pedro y don José Torres Calvi, contra resoluciones del Consejo de Ministros de 8 de febrero de 1977 (ratificados al desestimarse el recurso de reposición el 20 de mayo siguiente), las debemos anular, dejándolas sin efecto en el particular referente a la sanción de multa por daños y perjuicios (por 22.612.320 pesetas respecto de la finca "La Doctora" y por 61.211.726,13 pesetas en relación con la finca "San José de Palmete"); manteniendo en el resto (multas por beneficios obtenidos en las cifras de 54.243.746,50 y 24.769.811,20 pesetas respecto de las fincas de "San José" y "Doctora" (respectivamente), los pronunciamientos de las resoluciones del Consejo de Ministros impugnadas en este proceso, por ser en tales extremos ajustados a Derecho; todo ello sin expresa condena en costas.»

El Consejo de Ministros, a propuesta del excelentísimo señor Ministro de este Departamento, en su reunión del día 5 de junio de 1985, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, en lo que a este Departamento afecta.

De esta resolución, de la sentencia y de los antecedentes necesarios, debe darse traslado a la Junta de Andalucía a los efectos que pudieran proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la mencionada Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 28 de junio de 1985.—P. D. (Orden de 6 de junio de 1979), el Subsecretario, Baltasar Aymerich Corominas.

Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.